

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá, D.C., siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00209-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

De la revisión a la acción constitucional se advierte que la accionante elevo solicitud de medida provisional así: “ORDENAR al INVIMA de forma provisional se autorice la importación temporal del MEDICAMENTO TRIKAFTA TABLETAS (ELEXACAFITOR 100MG + TEZACAFITOR 50 MG/IVACAFITOR 75 MG), a efectos de evitar que se produzca la pérdida de mi vida o se empeore mi CALIDAD DE VIDA, SALUD, por cuenta de la negativa a suministrárseme el medicamento prescrito y ordenado por mi médico tratante CATALINA VÁZQUEZ, quien concluyó la necesidad del medicamento TRIKAFTA TABLETAS para el tratamiento de la enfermedad FIBROSIS QUÍSTICA E-849”.

Las medidas provisionales son instituidas para proteger un derecho; aquellas se encuentran regulada en el art. 7 del Decreto Ley 2591 de 1991 mediante el cual se estable la posibilidad que el Juez cuando lo considere necesario y urgente pueda decretar medidas provisionales para asegurar el objeto del proceso.

La Corte Constitucional ha precisado que procede el decreto de medidas provisionales frente a las siguientes hipótesis: (i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación¹.

En Sentencia 977/14 la Corte constitucional al suministro de fármacos NO-POS que no cuentan con registro de Invima; indicó: “(...) No obstante, lo anterior, existen eventos en los cuales no sólo se reclaman medicamento o tratamientos por fuera del Plan Obligatorio de Salud, sino que los mismos a su vez no cuentan con registro y autorización del INVIMA, sobre lo cual esta Corte también ha realizado pronunciamientos al respecto.

En sentencia **T-173 de 2003**, se reiteró las cuatro subreglas que debe observar el juez en estos eventos, a saber: (i) que la exclusión amenaza sus derechos fundamentales, (ii) que el medicamento no puede ser reemplazado por uno que esté contemplado en el POS y que tenga igual efectividad, (iii) que no puede asumir el costo del mismo y (iv) que haya sido prescrito por un médico de la EPS a la cual está afiliado. Igualmente, esta Corte explicó que en los casos donde se ha autorizado el suministro de estos fármacos, se ha partido de la certificación que el mismo médico tratante ha realizado sobre los aspectos mencionados; además, la Sala también precisó que la negativa frente al

¹ ver entre otros, los autos A-040A de 2001, A-049 de 1995, A-041A de 1995 y A-031 de 1995, Auto 258/13

suministro de los mismos es inconstitucional, cuando pone en grave riesgo la salud del peticionario.

En sentencia **T-418 de 2011**, mediante la cual realizó el pronunciamiento más claro en relación con el suministro de medicamentos que no cuentan con registro de INVIMA. En esta ocasión, la Sala Primera de Revisión expuso que los tratamientos en fase experimental no brindan seguridad científica sobre su beneficio y por ello no es un derecho constitucional que deba ser garantizado, de manera que:

“En tal medida, un medicamento experimental no garantiza con certeza suficiente el goce efectivo del derecho a la salud. Por tanto, no puede considerarse que se trate de un servicio de salud que se requiera. Por tanto, nadie tiene el derecho constitucional de acceder a un medicamento que es experimental. Se trata entonces otra vez, del principio de evidencia científica, antes mencionado, según el cual, si un servicio se requiere o no, depende de la mejor evidencia científica, aplicada al caso concreto y específico”

Igualmente, se estableció que pueden autorizarse excepcionalmente tratamientos experimentales en eventos en los cuales logre evidenciarse que no existe fármaco sustituto dentro del comercio nacional, o a pesar de encontrarse alguno, ha sido controvertido médicamente por su falta de efectividad en relación con el requerido. Al respecto, la Sala expuso que:

“Y aunque en principio el médico tratante debe atenerse al momento de recetar a los medicamentos comercializados nacionalmente, puede excepcionalmente recurrir a algunos que aún no hayan sido aprobados, siempre y cuando (i) no exista un alternativa medicinal, sí contemplada y (ii) exista evidencia científica suficiente en la comunidad médica acerca de la calidad, seguridad, eficacia y comodidad del medicamento en cuestión. Es decir, supone la carga de mostrar que el servicio de salud no es experimental, que sí ha sido probado y demostrado, aunque aún no haya sido aprobado formal y legalmente, y que lo requiere la persona a la que se le recetó”.

En sentencia **T-042 de 2013**, la Corte reiteró que según el artículo 6 de la Resolución No. 0548 de 2010, sólo podrán autorizarse servicios médicos que se encuentren debidamente autorizados por el INVIMA. Además, el fallo expone que *“con respecto a los medicamentos No POS que carezcan de registro de INVIMA, que el juez de tutela no puede: (i) ordenar una medicina que se encuentre en etapa experimental y (ii) se debe evitar el grave riesgo en la vida del paciente, por lo tanto es necesario evaluar la prescripción del médico tratante por medio de criterios científicos”.*

En sentencia **T-310 de 2013**, se concluyó que el suministro de medicamentos o tratamientos NO-POS, que además no se comercializan en el País por no contar con autorización del INVIMA, es procedente en aquellos eventos en los cuales el juez constitucional evidencia el cumplimiento de las subreglas mencionadas anteriormente y, cuando esta negativa pone en grave riesgo la salud del paciente”.

En consideración a lo expuesto, el Despacho observa que no cuenta con los suficientes elementos de juicio para acceder favorablemente a la solicitud de medida cautelar previa elevada por la accionante ello a razón que desconoce la posible existencia de fármaco sustituto dentro del comercio nacional, además se hace necesario en el escenario constitucional debatir aspectos tales como si el mencionado medicamento es el único que puede producir efectos favorables en la paciente, que no se trate de una droga en etapa experimental y por último, que la paciente carezca de capacidad de pago para asumir el costo del mismo

CÚMPLASE, (2)

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

42d778e7420256d393ef0e19ba457d1aa7177f7a6572be19d2a649da6f3c7c0a

Documento generado en 07/04/2021 04:47:35 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>